



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: MARLENY OMAIRA GIRALDO GIRALDO  
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -  
COLPENSIONES; SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS  
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.; y  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 017 2019 00154 01  
Sentencia: S-075

### **AUTO**

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, a favor del Dr. DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO, quien se identifica con T.P. N° 271.442 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

De otro lado, en atención a la escritura pública 885 del 28 de agosto de 2020 allegada al expediente, se le reconoce personería como apoderado judicial de PORVENIR S.A. al Dr. JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ SIERRA, T.P. 158.703 del C. S. de la Judicatura.

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el 24 de junio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

MARLENY OMAIRA GIRALDO GIRALDO demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además que se condene a las entidades demandadas al pago de las costas del proceso.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 5 de octubre de 1967; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el

23 de mayo de 1988; que en el mes de septiembre de 1996 se trasladó al RAIS administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A.; que posteriormente se trasladó a la AFP PORVENIR S.A.; que al momento de esas afiliaciones realizadas a los fondos privados, no fue debidamente asesorada, ni informada sobre las implicaciones y consecuencias de esa decisión; y que una liquidación de su situación pensional muestra que en el RAIS alcanzaría una mesada pensional de un salario mínimo, mientras que, de haber permanecido en el Régimen de Prima Media, su pensión habría alcanzado una suma de \$1'627.673.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación a esa entidad y el traslado a la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1996. Frente a los demás hechos dice que no le constan por tratarse de afirmaciones frente a un tercero ajeno a su entorno y por ende deben ser probadas dentro del proceso. Se opuso a las pretensiones en tanto no se cumplen los requisitos estudiados por la jurisprudencia para determinar la viabilidad de la ineficacia del traslado. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

PROTECCIÓN S.A. a su turno, acepta la fecha de nacimiento de la demandante, así como la afiliación a esa entidad, pero aclara que el formulario respectivo se suscribió el 01 de agosto de 1996, lo que se produjo luego de la información brindada por sus asesores, la cual fue clara, cierta y veraz, ya que en su momento le indicaron los efectos y consecuencias del traslado de régimen y le explicaron las características de su funcionamiento. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de

causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones, Traslado de aportes a Porvenir e inexistencia de la obligación de devolver las cuotas de administración por falta de causa.

PORVENIR S.A. por su parte, desconoce la totalidad de hechos de la demanda, en algunos casos por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que no merecen pronunciamiento, y en otros invitando a la prueba dentro del proceso, advirtiendo en todo caso que en su momento le brindó a la demandante una asesoría veraz, completa y oportuna sobre todos los aspectos del RAIS. Al igual que las demás entidades, se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto no encuentra fundamento fáctico y legal para que se declare la ineficacia o nulidad de la afiliación. Como excepciones propuso prescripción, buena fe e inexistencia de la obligación.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 24 de junio de 2020, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante al Régimen de Ahorro Individual, ORDENANDO su regreso y reactivación a COLPENSIONES sin solución de continuidad. ORDENÓ además a PORVENIR S.A., trasladar a COLPENSIONES los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo los rendimientos que se hubieren causado y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima. Finalmente CONDENÓ en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1`800.000.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con lo decidido, la apoderada de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, limitado al hecho de no haberse ordenado el traslado de las cuotas de administración, incluidas las

cuotas de seguro. Solicita se analice esa decisión en relación con el principio de la sostenibilidad financiera, que fue incorporado a la Constitución Política a través del acto legislativo 01 de 2005 y que se analice que la consecuencia de la ineficacia es una sola, esto es, las cosas vuelven a su estado inicial, por lo tanto, no debe permitirse que el fondo privado se guarde para sí ningún dinero. Agrega que sobre el tema hay línea jurisprudencial desarrollada en sentencias SL del 8/09/08 radicado 31989, SL 17595/17, SL 4989/18, SL 1421/19, por las cuales se señala que, una vez declarada la ineficacia del traslado, se debe reintegrar la totalidad de la cotización, incluyendo seguros provisionales y gastos de administración, ya que, de no ordenarse de esa manera, se generaría un detrimento patrimonial del Estado definido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000.

La apoderada de PORVENIR, por su parte, advierte que la afiliación cumplió con el pleno de los requisitos legales en la época, por cuanto se hizo de manera libre y espontánea, cumpliendo lo que establece el artículo 3 en su literal b de la ley 100 en cuanto a la afiliación al RAIS, por lo que ahora no se puede pretender dejar sin efecto jurídico un acto válido que nació a la vida jurídica, pues la demandante, dentro de las disposiciones legales que la ley le concede para manifestar su inconformidad, no lo hizo con el tiempo debido. Además, se han presentado cambios normativos en los cálculos de tasa de mortalidad y cálculos de la pensión, los cuales se salen de las manos de la entidad. En cuanto a la condena de traslado de los dineros destinados al fondo de garantía de pensión mínima, se debe tener en cuenta que la entidad siempre ha sido respetuosa de la ley 100 de 1993, y en ninguna parte se determina que esa esta entidad sea quien deba asumir dichos porcentajes.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión indicando que,

tal y como se pudo verificar en audiencia, los fondos privados de pensiones le brindaron a la demandante una plena información a la hora de realizar el traslado de régimen, dando cumplimiento a su deber de información y llevando a que voluntariamente se suscribiera el respectivo formulario. Agrega que las normas laborales establecen unos requisitos para el traslado de régimen, y prohíbe expresamente el mismo cuando a la persona le falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, conforme al artículo 2º de la Ley 797 de 2003, lo que impide a la demandante retornar al Régimen de Prima Media. De mantenerse la decisión de primera instancia, solicita se tenga en cuenta que en el Régimen de Ahorro Individual se gravan los aportes de los afiliados con un porcentaje de administración que no existe en el Régimen de Prima Media, por lo que, según se advierte en las sentencias SL del 8 septiembre de 2008, rad. 31989, SL 17595-2017, SL 4989-2018 y SL1421-2019, hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) los recursos de la cuenta individual del afiliado, ii) las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) los rendimientos, y iv) los porcentajes destinados al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración, todo lo cual se debe devolver de manera indexada.

PORVENIR S.A. a su turno, solicita se revoque la sentencia al considerar que no le asiste razón al fallador de primera instancia, por cuanto en este asunto no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento con el cambio de régimen de la demandante, pues no se alegó y menos probó ninguna de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación con esa entidad deba declararse eficaz. Agrega que el formulario de afiliación suscrito por la demandante, es un documento público que se presume auténtico según los arts. 243 y 244 del CGP y el parágrafo del art. 54A del CPT, que además contiene la declaración de que trata el artículo 114 de la 100 de 1993, esto es que la selección fue libre, espontánea y sin presiones. Insiste además en que en el presente asunto la parte demandante realizó cambio de régimen

de forma libre y voluntaria, en el cual se le brindó una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación. Solicita finalmente que, en caso de considerar que el negocio jurídico celebrado entre las partes no tuvo validez, se tenga en cuenta el artículo 113, literal b) de la ley 100 de 1993 que menciona cuáles son los dineros que se deben trasladar cuando existe el cambio de régimen, esto es, el saldo de la cuenta individual incluidos los rendimientos, lo que impide que legalmente se pueda ordenar la devolución de sumas diferentes a las referidas en esta norma como las cuotas de administración.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por las apoderadas de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de ésta última -en los temas restantes- con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora MARLENY OMAIRA GIRALDO GIRALDO realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MARLENY OMAIRA GIRALDO GIRALDO nació el 5 de octubre de 1967 (f. 41); **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 23 de mayo de 1988, acumulando en esa entidad un total de 335.57 semanas (f. 73); **iii)** el 01 de agosto de 1996 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A., la que tuvo efectos desde el 1 de octubre de ese mismo año; y **iv)** el 02 de agosto de 2002 se trasladó a la AFP

PORVENIR S.A., entidad en la que se encuentra afiliada actualmente (f. 177).

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado por las AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del primero de los fondos privados, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias*



*de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero, el cual incluye los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *“en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen”* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa,

adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario***

*[...].”*

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

### **Cuotas de administración.**

De otro lado, en cuanto a la decisión del a quo de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, pero sin incluir los gastos de administración y seguros previsionales, tema que se revisará según el recurso de apelación planteado por COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFPs correspondientes, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*(...)*

*Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “...

*aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.*

Dijo además en esa providencia, que:

*“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)*

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”*

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP PORVENIR S.A. que proceda con el traslado de las cuotas de administración recibidas durante el tiempo que la señora MARLENY OMAIRA GIRALDO GIRALDO estuvo vinculada a esa entidad, lo que abarca las sumas adicionales de las aseguradoras, los gastos de administración, comisiones y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima; y ADICIONADA en el sentido de ordenarle también a la AFP PROTECCIÓN S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES esos mismos conceptos y que hayan sido recibidos durante el tiempo de vinculación de la demandante a esa entidad.

Todo lo anterior sin que sea procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de

apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el día 24 de junio de 2020, pero con las siguientes novedades según se dijo en la parte motiva: **1. La MODIFICA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROVENIR S.A. que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, además del saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante y los rendimientos financieros, el valor recibido por concepto de cuotas de administración durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad, lo que abarca igualmente los porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima; y **2. La ADICIONA** en el sentido de ordenar también a PROTECCIÓN S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES el valor recibido por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 066  
del 21 de abril de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **794fa10a2fce349f46600501f4f3c70f4099acb4cc6807982f76e9374dec939f**

Documento generado en 20/04/2021 01:39:32 PM